Doutrina

EL DERECHO AGRARIO ESPAÑOL DE HOY

JOSÉ MARÍA DE LA CUESTA SAENZ

I — Orígenes

Aunque los orígenes de la preocupación de los juristas por el Derecho aplicable a la actividad agrícola, y fundamentalmente por el estatuto de la tierra con destino agrario son ya lejanos en el tiempo, e incluso la denominación aparece entre los reformistas del siglo XVIII,¹ por lo que puede decirse que dista mucho de ser una novedad, y hasta puede señalarse como curiosidad histórica que en España se presentó un Proyecto de Código Rural por el jurista y Diputado M. Dánvila Collado que de haber prosperado, se hubiese adelantado al propio Código civil de 1889, es lo cierto que con los perfiles que hoy presenta, el Derecho Agrario es una realidad relativamente reciente en prácticamente todos los ordenamientos jurídicos, y sin duda en el español.

En efecto, la legislación sobre los contratos agrarios data sobre todo de la tercera década de este siglo (arrendamientos y aparcerías), y las primeras disposiciones sobre crédito agrícola (*warrants* y prenda agrícola) y sobre regulación de mercados (Ley Osma de Industria Azucarera) surgieron respectivamente en 1917 y 1907. Además puede decirse que el núcleo del *corpus* normativo, en España y en los demás países

Europeos data de los años treinta, y surge como un Derecho para la crisis, ya que trata de aliviar los problemas de la superproducción tanto para las explotaciones agrícolas como para las industrias transformadoras, al tiempo que procura la reasignación de la tierra con la extensión y la estabilidad necesarias para la eficiencia de la actividad agraria.

Por ello, aunque hay una corriente de constante preocupación por la legislación adecuada a la estabilidad y el desarrollo del mundo rural, que hunde sus raíces en el reformismo de la Ilustración, con protagonistas tan destacados en España como Jovellanos, que se reaviva en el último tercio del siglo XIX por obra de movimientos intelectuales como el regeneracionismo encabezado por Joaquín Costa, lo cierto es que la vocación por el estudio sistemático del Derecho Agrario y por la mejora de su enseñanza, no se hace presente con suficiente amplitud hasta la segunda mitad del siglo en curso.²

Es concretamente la acogida dispensada por los profesores de Derecho Civil españoles a la doctrina desarrollada en Italia por G. Bolla sobre su ya muy desarrollada legislación agraria a finales de los años veinte, y su renovado impulso con la política agraria de la postguerra, lo que explica

1. Tal vez la utilización más antigua tuvo lugar en la obra *Direito Agrario*, de P. H. Homem de Carvalho, Lisboa, 1815, cuyo conocimiento debo al colega de la Universidad de Beja D. Masseno.

2. La literatura jurídico agraria española aparece, junto con el impulso expansivo de la legislación agraria, en la década de los treinta, pero con carácter todavía fragmentario y discontinuo.

el relanzamiento teórico que sobre nuestro ya abundante desarrollo legislativo, y con aportaciones tan destacables como la de D. Federico de Castro y Bravo,³ permite ya hablar de un Derecho Agrario español, y de una escuela española de agraristas.

No obstante la innegable influencia italiana, presente siempre desde entonces en los teóricos del Derecho Agrario español, hay que señalar que éste, tiene rasgos muy diferenciados, no sólo por la razón obvia que supone el tener que operar sobre institutos diferentes, sino también por profundas razones de orden metodológico que podían resumirse en el hecho innegable de que se trata de una corriente que asume objetivos más modestos que los sabiamente perseguidos por la doctrina italiana.

Esta "modestia" relativa o comparativa del Derecho Agrario español obedece a que desde su inicio, no se plantea entre los agraristas españoles de modo tan agudo la cuestión de la autonomía del Derecho agrario, en sus varias facetas de autonomía nor-mativa, científica y didáctica, lo que sin duda puede ser un lastre teórico, pero también puede significar un menor riesgo de extravío y una mayor garantía de pragmatismo.

Así, la defensa de la especificidad del Derecho agrario se ha limitado entre los agraristas españoles a postular que tal asignatura no esté ausente de los Planes de Estudio ni en las Facultades de Derecho ni en las Escuelas de Ingeniería Agronómica, y en consecuencia a que sea considerada disciplina en sí misma, y pese a su carácter interdisciplinar. En este sentido se ha calificado el Derecho Agrario como *ius proprium*,⁴ que aunque nacido en el seno del Derecho Privado ha tenido y tiene un fuerte componente iuspublicístico, que explica que entre los agraristas españoles se

cuenten tanto los Profesores de Derecho Civil, numéricamente predominantes, como los Profesores de Derecho Administrativo.

Por lo demás, parece que hay que convenir en que tratándose de regulaciones surgidas a menudo a raíz de algún tipo de crisis (de mercados, social, etc.), es lógico que los institutos jurídicos que constituyen el objeto de estudio del Derecho Agrario, tal vez con la señaladísima excepción de los contratos agrarios, sean institutos de menor permanencia que los que integran el contenido del Derecho privado patrimonial, y además estén afectados por una variabilidad mucho mayor que la que normalmente tienen otros institutos jurídico-privados, en los que hay tendencia a razonar *sub specie aeternitatis*.⁵

Y a causa de esta innegable cualidad mudable de muchos de los institutos del Derecho Agrario, parece poco justificada la afirmación a ultranza de una autonomía científica que, si en algún momento puede venir aconsejada por un mayor alejamiento respecto de los principios del Derecho común, al no poder asegurarse que tal alejamiento persista, y no poder excluir un próximo retorno al Derecho común, sería una apuesta demasiado arriesgada.

II — Vicisitudes más recientes del Derecho Agrario español como ciencia

Tras aquellos momentos de afirmación de la disciplina del Derecho agrario en España puede hablarse de una cierta estabilidad en cuanto que permanece el acuerdo sobre la búsqueda del nexo de unión de los institutos propios del Derecho Agrario en el régimen de la tierra con destino agrario y de la empresa agraria, aunque hubiese siem-

3. F. de Castro y Bravo, "El Derecho Agrario de España", *Anuario de Derecho Civil*, 1954, pp. 388 y ss.

4. J. L. De los Mozos, *Derecho civil español*, Salamanca, 1977, pp. 137 y ss.

5. En tal sentido por lo que respecta al Derecho Agrario Comunitario, ver A. Carozza, "Gli istituti del diritto agrario comunitario", en *Introduzione allo studio del diritto agrario comunitario*, ed. ETS, Padova, 1994, pp. 121 y ss.

pre algunas discrepancias en cuanto al contenido del Derecho Agrario.⁶

Las dificultades de definición de lo agrario junto con la prosperidad y expansión de actividades cada vez más desligadas de la tierra, llevaron al citado Prof. A. Carrozza a proponer una noción de la agrariedad centrada en la vinculación al ciclo biológico, criterio que confesadamente meta-jurídico, ha sido después bastante utilizado, pero sin llegar a sustituir el viejo anclaje fundiario asumido inicialmente por la doctrina española, de modo que ni la recepción en el Derecho positivo de nuevas preocupaciones como la relativa a la defensa del medio ambiente y del consumidor, supusieron inicialmente un cambio de enfoque.⁷

Tan sólo, hace ahora doce años, con la aparición de la revista *Derecho Agrario y Alimentario* impulsada por un numeroso grupo de agraristas y muy destacadamente por A. Ballarín Marcial se toma conciencia de la existencia de una nueva configuración del Derecho Agrario que describe así magistralmente el Prof. de los Mozos en el primer editorial de la entonces nueva revista: "al principio, en sus comienzos, el Derecho agrario, recogiendo la tradición del *ius georgicum* aparecía como un ordenamiento vinculado a la tierra, auspiciado por ... el Derecho social en la tradicional dicotomía entre Derecho público y Derecho privado ... ya en la época de entre guerras, se percibió su vinculación a la producción ... al *fundus* según la sugerente terminología del maestro G. Bolla. Con posterioridad a la II Guerra Mundial, el protagonismo de la empresa pasa al empresario y el *tertium genus* ya no el Derecho social sino el Derecho económico... nuestra disciplina en la actualidad se desplaza del viejo Derecho agrario al nuevo Derecho alimentario".

6. En tal sentido A. Soldevilla y Villar, *Derecho Agrario*, I, Valladolid, 1991, pp. 60 y ss.

7. A. Ballarín Marcial, "Derecho agrario. Derecho alimentario, derecho agroalimentario", en *Derecho agroalimentario*, I, 1985, pp. 7 y ss.

En efecto, el reflejo jurídico positivo de nuevas preocupaciones, como la tutela de los consumidores, y la tutela del medio ambiente y del patrimonio histórico y paisajístico, entre otros llamados "intereses difusos", hacía pensar al agrarista en una posible ruptura del Derecho agrario en otras varias disciplinas jurídicas cuyo nexos de unión no podía ser ya la tierra, al tiempo que su relación con la empresa agraria tampoco era fácil de construir. En este contexto, no sólo se podía poner el acento en las reglas emanadas por la CEE para la estabilización de los mercados agrarios, lo que podía justificar el hablar de "complejo agroalimentario" y de Derecho agrario y alimentario, sino que también podía empezar a hablarse de un Derecho agrario medioambiental, como lo atestigua a aparición en España de una obra de tal título (*Derecho agrario medioambiental*, Aranzadi, Pamplona 1992) obra de J. F. Delgado de Miguel, uno de los más activos agraristas españoles del momento, que fue precisamente su tesis doctoral.

Creo no obstante la bondad y necesidad de estos esfuerzos, hoy multiplicados en Europa por el interés que pone en ello el IV Programa Marco de la UE, que por más que sea muy comprensible el prurito de "estar a la última" y de encajar en las preferencias del momento, tenía una gran razón el maestro Carrozza en su trabajo "Il programma scientifico del diritto agrario a quindici anni dal duemila" que fue su aportación al encuentro celebrado en Pisa en 1985, cuando afirmaba la "centralidad del fenómeno productivo" como una constante en el Derecho Agrario.

Años más tarde en la publicación de la UMAU *Derecho agrario* (Padova, Cedam, 1992), subtitulada significativamente *Dal regime fondiario al diritto de la produzione agricola*, de nuevo tanto A. Ballarín como J. de los Mozos veían esa misma evolución en el Derecho agrario español que experimentaba iguales tensiones.

Yo mismo en el encuentro celebrado en Pisa en 1992 que se plasmó en la obra colectiva *Introduzione al studio del diritto agrario comunitario*, insistí en que por más que pudiese parecernos que el Derecho agrario estallaba fragmentándose en multitud de pequeñas disciplinas jurídicas, lo cierto es que podría mantenerse la unidad acudiendo a la centralidad del fenómeno productivo, y lo que es tanto o más importante, podía mantenerse una gran homogeneidad metodológica, cualquiera que fuese la faceta del Derecho positivo cuyos institutos jurídicos cayesen bajo el objetivo del agrarista.

Creo que las muchas e intensas conmociones sufridas por el ordenamiento jurídico español en los últimos veinte años, han dejado profundas huellas en el Derecho positivo y en el Derecho Agrario como ciencia, pero no puede decirse que hayan roto su unidad esencial. No la rompió el poner el acento en el "complejo agroalimentario" y en su regulación; tampoco la ha roto el hincapié que hoy se hace en la protección del medio ambiente, del que el empresario agrícola se constituye en verdadero guardián; pero es que fenómenos como el desarrollo del Estado de las autonomías que diseñó el título VIII de nuestra Constitución de 1978, tampoco podía romper esa unidad,⁸ porque las competencias legislativas no podían ejercitarse en contradicción con las regulaciones emanadas de las instituciones de la CEE, habilitadas al efecto por los artículos 38 y siguientes del Tratado Constitutivo de la CEE, ni tampoco podían encarnar principios opuestos a los hasta entonces encarnados en el Derecho Agrario estatal.

En suma, el vaciamiento de las competencias legislativas y de ejecución de la Administración central, se produjo durante los años ochenta en un doble sentido a cau-

sa de la adhesión del Reino de España a la CEE con la consiguiente vigencia de las normas, sobre todo Reglamentos del Consejo, que integran el entramado legal de la Política Agrícola Común, y a causa en sentido contrario del desarrollo de las Estado de las Autonomías que ha culminado con la asunción de competencia legislativas por todas las Comunidades Autónomas.

Pero, un cambio tan profundo como el descrito no puede decirse en rigor que haya convertido la tarea del agrarista en una dificultosa labor por tener que afrontar institutos desconocidos y por tener que aislar a partir de esos institutos nuevos principios jurídicos. Muy al contrario, puede decirse que son excepcionales los institutos nuevos surgidos de las competencias legislativas de las asambleas de las Comunidades Autónomas, y nulas las posibilidades de hallar nuevos principios inspiradores en el Derecho Agrario autonómico, que a lo sumo, ha privilegiado algunos objetivos compartidos por toda legislación agraria, señalando y acentuando prioridades para una región concreta, pero sin que tal creatividad haya entrado por lo general en fricción con las normativas de otro nivel aplicables principal o subsidiariamente.

Tampoco el fenómeno de la "comunitarización de los derechos agrarios europeos",⁹ que afectó intensamente al Derecho español, ha tenido poder para subvertir el método y para fragmentar la comunidad de los agraristas, que tan sólo han visto incrementado su campo de trabajo con nuevos institutos que sólo muy limitadamente obligan a recomponer otros elementos de un conjunto que ha de ser armónico.

Las propuestas sobre un enfoque del Derecho agrario basado en la tutela de derechos fundamentales,¹⁰ no han pasado

8. J. de la Cuesta, "Principios de Derecho agrario de Castilla y León?", en *Derecho Agrario español y de todas las Comunidades Autónomas*, Zaragoza, 1993, pp. 121 y ss.

9. Objeto de estudio en *IV Giornate camerti di diritto agrario comunitario*, Camerino-Lérida 1990-91 promovidas por E. Capizzano y A. Luna Serrano.

10. *VI Giornate camerti di diritto agrario comunitario*, Camerino-Granada Bruselas, 1992-1993.

tampoco de implicar algún retoque de no mucha amplitud en el tratamiento de las exigencias de calidad de los productos agrícolas y de protección de los consumidores.

No obstante, hay que concluir que los últimos veinte años han supuesto en el Derecho Agrario español un período de extraordinaria fecundidad legislativa, y de intensa reflexión autocrítica que ha permitido que se alcance una cierta madurez, por lo que merece la pena hacer un breve recorrido por los principales hitos de la evolución reciente del Derecho Agrario entendido como legislación, ya que arroja algunas enseñanzas bastante útiles.

III — Breve indicación de la reciente historia de la legislación agraria española

Si el Derecho agrario anclado en la vinculación con la tierra tuvo su más acabada y completa expresión en el Texto Refundido de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario (D. de 12 de Enero de 1973), todavía vigente como ley estatal en la mayor parte de su contenido, el “nuevo Derecho Agrario”, entendiendo por tal el posterior a la Constitución de 1978, no ofrece un texto legal tan ambicioso entre sus muchos frutos, sino que presenta una mucho mayor variedad y amplitud de miras, y una frecuente reconsideración de lo que pueden calificarse como “pasos en falso”, o disculpables errores a los que la implacable realidad ha privado de eficacia social aconsejando su derogación.

Esta plausible reconsideración hace conveniente abordar este sumario elenco de nuestra legislación agraria dividiendo esta etapa en tres subperíodos que convencionalmente podemos calificar con base en la instancia predominante en un primer período de legislación estatal, un segundo período de legislación autonómica, y un tercer período de comunitarización.

El primer período, arranca inmediatamente después de la Constitución, como cumplimiento por todos los partidos políticos y señaladamente del entonces mayoritario (Unión del Centro Democrático) de los llamados “pactos de la Moncloa”, en los que se había dado una gran importancia — a tenor con la que se le daba en los programas electorales de todos los partidos políticos — a la legislación agraria, todavía con una inspiración reformista de corte tradicional.

La Ley 34/1979 de 16 de Noviembre sobre Fincas Manifiestamente Mejorables, quiso ser un desarrollo de la función social de la propiedad (art. 33.2 de la CE), estableciendo la expropiación del uso como sanción del incumplimiento de las obligaciones del propietario previstas en los arts. 1 y 2 de la LRDA TR 12-1-1973, pero ciertamente no tuvo una aplicación ni amplia ni eficaz, lo que no habla en favor de su adecuación a la realidad. Mucha mayor importancia para la vida de las empresas agrarias y para la estabilidad de las rentas del sector, tuvo y tiene la Ley de Seguros Agrarios Combinados de 28 de Diciembre de 1978, que inauguró los llamados seguros agrarios integrales, consistentes en asegurar prácticamente contra todo riesgo ciertos montantes de producción agrícola o ganadera.¹¹

No menos importancia tuvo en esta primera etapa la Ley de Arrendamientos Rústicos de 31 de Diciembre de 1980, que venía a sustituir al TR. de 29 de Abril de 1959, prácticamente vertebrado sobre la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1935, y que incorporaba un perfeccionado sistema de actualización y revisión de rentas, una atrevida regulación de las mejoras por el arrendatario, y la tendencia compartida con la legislación italiana, a convertir en arren-

11. J. de la Cuesta, “Los seguros agrarios”, en *Revista Jurídica de Castilla la Mancha*, n. 19 (1994), pp. 319 y ss., donde afirmo que se trata de uno de los más perfectos sistemas conocidos.

damiento todos los contratos agrarios, y especialmente la aparcería.

Sus puntos débiles radicaron en la regulación del plazo y del acceso a la propiedad, que han resultado muy conflictivos y han merecido, como veremos posterior reconsideración.

Uno de los últimos textos importantes de este subperíodo fue el Estatuto de la explotación Agrícola Familiar y de los Jóvenes Agricultores de 24 de Diciembre de 1981, Ley extraordinariamente amibiciosa, no sólo por definir la explotación agraria, en términos teóricamente muy aceptables, sino por consagrar toda una serie de mecanismos civiles, administrativos y tributarios para garantizar la continuidad de la explotación, cuya aplicación ha dejado mucho que desear y aconsejo recientemente su derogación.

Por último, cierra este período la Ley de Contratación de Productos Agrarios de 26 de Mayo de 1982, que reguló bastante prolijamente no sólo los llamados contratos agro-industriales, sino también los acuerdos colectivos e interprofesionales, que aunque ya existían (desde los años treinta), no tenían reconocimiento legislativo.

No hay que olvidar, pese a su modestia, el Real Decreto 1776/1981 de 3 de Agosto, por el que se aprueba el estatuto que regula las Sociedades Agrarias de Transformación, figura peculiar de nuestro derecho Agrario con enorme implantación en la realidad.

El segundo subperíodo al que nos hemos referido viene caracterizado por un casi absoluto monopolio de la legislación agraria por parte de las Asambleas de las CC.AA. En efecto, la única Ley estatal en este período fue la Ley de Bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias de 24 de Diciembre de 1986, todavía en fase de desarrollo por las CC.AA. en este momento, porque por lo demás pasa a primer plano la legislación autonómica, de la que puede decirse que se centró en este primer momento sobre todo en el Derecho Agrario de corte más tradicional, el más vinculado a la

tierra, perfeccionando y adaptando con distinto grado de acierto el Derecho estatal prefigurado en el LRDA de 1973.

En efecto, hubo en tres CC.AA. leyes de reforma agraria en el sentido más radical de reasignación del factor tierra; la Ley 8/1984 de 3 de Julio, de Reforma Agraria Andaluza, la Ley Aragonesa 3/1986 de 10 de Marzo de 1986, y la Ley Extremeña 1/1986 de 2 de Mayo sobre la Dehesa de Extremadura. La primera de ellas, combatida ante el TC y revalidada por éste en la STC de 26 de Marzo de 1987 abrió un camino que resultaba a todas luces anacrónico, lo que explica su escasa y conflictiva aplicación, al igual que la de las leyes que siguieron su huella.

Más perdurabilidad y eficacia práctica cabía vaticinar a las leyes autonómicas que pretendían adecuar a las necesidades regionales del momento instrumentos tradicionales de la reforma de estructuras como la Concentración Parcelaria. Abrió este capítulo la Ley Gallega de 14 de Agosto de 1985 de Concentración Parcelaria para Galicia, a la que siguieron la Ley 4/1990 de 23 de Marzo sobre Concentración Parcelaria, Conservación de Obras, Unidades Mínimas de Cultivo y Fomento de Explotaciones Rentables de Cantabria, la Ley 14/1990 de 28 de Noviembre de Concentración Parcelaria de Castilla y León, la Ley 14/1992 de Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en otro orden de cosas, las leyes catalanas 2/1983 de 9 de Marzo de Alta Montaña, 24/1984 de 28 de Noviembre sobre Contratos de Integración y 4/1984 de 24 de Febrero del Instituto Catalán de Crédito Agrario, así como algunos desarrollos autonómicos en materia de Cámaras Agrarias (Cataluña, Galicia y País Vasco), y la regulación de inferior rango de muchas CC.AA. en materia de Unidades Mínimas de Cultivo.

La última etapa o subperíodo de la legislación agraria española reciente viene dada por el predominio progresivo de la regulación de la PAC, en momentos de cam-

bio en esta regulación tanto en materia de estructuras agrarias, al comenzar a utilizarse profusamente los Reglamentos CEE del Consejo, que son de aplicación directa,¹² como en materia de intervención en los mercados, puesto que la regulación de los derechos de producción o cuotas (azúcar, lácteos, tabaco, etc.) suponía una mayor incidencia en los Derechos de los Estados miembros.¹³

Así, en la vertiente de Derecho de estructuras agrarias, aunque los Reglamentos comunitario en principio no requieran trasposición, a diferencia de las Directivas, dado que se trata de actuaciones cofinanciadas con los Estados miembros y no plenamente por el FEOGA, los ambiciosos Reglamentos como el 797/85, hoy sustituido por el Reglamento CEE 1328/91 de 21 de Julio, que constituye un verdadero Código de Derecho de estructuras agrarias, hubo de ser desarrollado primero por el RD. 808/87 y ahora por los RR.DD. 1887/91 de 31 de Diciembre y 204/96 de 16 de Febrero.

Igualmente, la retirada de tierras de cultivo autónoma, no inserta en el sistema de ayudas a herbáceos (Rtº. 1760/87), dio lugar al RD de 25 de Noviembre de 1988, y ahora la jubilación anticipada y la reforestación tras la reforma de la PAC por los Reglamentos del Consejo de 21 de Junio de 1992 (nada menos que 120), han dado lugar tanto a desarrollos en el Derecho estatal como en el Derecho autonómico.

En materia de mercados, los Reglamentos que rigen la cuota lechera han tenido que producir derecho estatal, como el RD 1888/91 de 31 de Diciembre, e igualmente la aplicación de la OCM del azúcar requiere indispensablemente de desarrollos a través

12. En tal sentido J. Díaz Fraile, *El Derecho comunitario sobre estructuras agrarias y su desarrollo normativo en el Derecho español*, Civitas, Madrid, 1990, *passim*.

13. J. de la Cuesta, "Los derechos de producción en agricultura y silvicultura", en *IV Congreso Nacional de Derecho Agrario*, ed. MAPA, Madrid, 1995, pp. 153 y ss.

de Acuerdo Interprofesional, que tienen un verdadero efecto normativo.

Estos profundos cambios, presididos por la lucha contra las producciones excedentarias y por una nueva visión del mundo rural que preconizó el Libro Verde de la Agricultura del Comisario F. Andriessen en 1985 y que luego fue asumido por el Comisario McSharry — autor del grueso de la reforma — y ahora por el Comisario Fischler, han impulsado una recomposición del conjunto y una reconsideración de buena parte de las orientaciones implícitas en nuestro viejo Derecho Agrario. En efecto, la retirada de tierras, la reforestación, la jubilación anticipada, las ayudas a zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental, y la extensificación de las producciones ganaderas, casaban mal con la orientación productivista implícita en los artículos 1 y 2 de la LRDA, y en algunas normas estatales y autonómicas de reforma agraria, que, simplemente han caído poco a poco en desuso. Pero leyes de mucha y conflictiva aplicación (UMC, arrendamientos rústicos, EFA, etc.) han necesitado una profunda revisión o simplemente una derogación expresa que ha venido de la mano de la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias de 4 de Julio de 1995, verdadero código de nuestro Derecho estatal de estructuras agrarias, que deroga buena parte de la LRDA, toda la Ley de 24 de Diciembre de 1981 y la regulación de la duración del arrendamiento rústico que se simplifica estableciendo un mínimo imperativo de cinco años.

En materia de mercados, y complementando la orientación hacia una economía contractual en la agricultura inaugurada por la Ley de 26 de Mayo de 1982, la Ley 38/1994 de 30 de Diciembre sobre Organismos Interprofesionales Agroalimentarios (modificada recientemente en la Disposición Adicional Primera de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1997), quiere establecer un marco alternativo a las OCM en la estabilización de los mercados agra-

rios, intento difícil por los límites que a ello impone el artículo 85 del TCCEE,¹⁴ pero sin duda indispensable en el futuro próximo.

IV — Conclusión

En fin, de este rapidísimo repaso por el Derecho Agrario español, puede extraerse como conclusión el que, dentro su modestia, goza de buena salud científica, y también como legislación está en un momento de renovada actividad impuesta por los profun-

dos cambios que han acaecido en el marco económico de la actividad agraria, que, si no permiten dejar de considerar el fenómeno productivo como centro del Derecho agrario, si que obligan a entender esa actividad productiva en modo mucho más acorde con los intereses generales a la conservación del medio ambiente y del patrimonio cultural y paisajístico, y también más acorde con los legítimos intereses de los consumidores, que el que representaba el estado inmediatamente anterior, no sólo en España sino en todos los países del entorno de la actual UE.

14. J. de la Cuesta, "Contratos normativos", *Estudios sobre el ordenamiento jurídico español*, Burgos, 1996, pp. 65 y ss.